El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

**TEMAS: PENSIÓN DE JUBILACIÓN / REAJUSTE / BAJO LAS LEYES 4ª DE 1976 Y 71 DE 1988 / EL REAJUSTE EXTRAORDINARIO DE LA LEY 6 DE 1992 Y EL DECRETO 2108 DE 1992 ES APLICABLE SOLO A LOS SERVIDORES DEL ORDEN NACIONAL / BAJO LA LEY 100 DE 1993 POR LA ELEVACIÓN DEL APORTE PARA SALUD / INTERESES DE MORA, ARTÍCULO 141 / NO APLICA PARA PENSIONES DE JUBILACIÓN CONVENCIONAL.**

Establece el artículo 1° de la Ley 4ª de 1976, por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones, que:

“ARTICULO 1°. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada año…”

Acorde con lo anterior, es claro que el momento a partir del cual debe realizarse el primer reajuste de la mesada pensional es “cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto vigente” o en el evento de que este no se hubiere elevado cuando haya transcurrido ese año. Así mismo, que con base en el parágrafo 3° de la norma en comento, indistintamente de las diferentes variables y esquemas allí previstos para el reajuste de las pensiones, lo cierto es que, si al aplicar las reglas de todos los incisos resulta un incremento inferior al 15%, este deberá equipararse a dicha cifra…

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Orlando Antonio Hincapié Caviedes consolidó el status de pensionado a partir de octubre de 1986, el primer reajuste de su mesada pensional debió ocurrir al momento en que se presentó un incremento en el salario mínimo mensual más alto vigente, esto es, el 1° de enero de 1987, debiéndose entonces tomar para efectos del cálculo del respectivo reajuste, el valor del salario mínimo legal correspondiente a esa anualidad y, el del año inmediatamente anterior, esto es, 1987-1986, para efectos del comparativo. (…)

Dispone el artículo 1° de la Ley 71 de 1988 que: “las pensiones a que se refiere el artículo 1º de la Ley 4º de 1976, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual. Parágrafo. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo”.

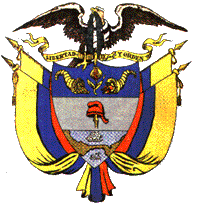
La lectura de tal disposición lleva a predicar que el legislador optó por tomar otro patrón de las revalorizaciones pensionales, prohijando como referente el incremento del salario mínimo legal mensual, prescribiendo que el reajuste se haría en el mismo porcentaje, pero como es elemental, a partir de la vigencia de dicha ley, con lo cual se enmendaba la inequidad, dado que a partir de entonces el reajuste pensional quedaba en un monto similar al costo de vida, toda vez que es un hecho notorio que los incrementos en la remuneración mínima se decretaron en un porcentaje similar al de aumento del IPC.

Del reajuste extraordinario previsto en la Ley 6 de 1992 y el Decreto 2108 de 1992. Solicita la parte actora, se acceda al reajuste pensional contemplado en la referida norma, al estimar que el mismo es aplicable por virtud del derecho a la igualdad, a favor de todos los pensionados del Estado, sin discriminar a los del orden territorial o distrital, tal como lo ha establecido de tiempo atrás la jurisprudencia del Consejo de Estado. (…)

… en relación con la aplicabilidad del referido reajuste, se precisa que si bien es cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha trazado una línea jurisprudencial según la cual es posible inaplicar la expresión “del orden nacional”, contenida en el artículo 1 del Decreto 2108 de 1992, por considerar que tal discriminación viola el derecho a la igualdad; también lo es que esta Sala comparte la línea jurisprudencial adoctrinada de tiempo atrás por el órgano de cierre de esta especialidad laboral, en el sentido de que el referido ajuste únicamente cobija a los pensionados del orden nacional, sin que pueda hacerse extensivo al pensionado del orden territorial o distrital, so pena de desbordar el querer del legislador y hacerle producir a la norma efectos en ámbitos diferentes. (…)

En cuanto al ataque de la parte actora, encaminado a que se acceda al pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es del caso precisar que, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que, estos réditos no son viables en pensiones de jubilación convencional ya que esta prestación no está regulada integralmente por la Ley 100 de 1993.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA**

**SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**

MAGISTRADA PONENTE:

**ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO**

|  |  |
| --- | --- |
| Demandante: | Orlando Antonio Hincapie Caviedes |
| Sucesora procesal | Marleny Galvis Montoya |
| Demandado: | Empresa de Energia de Pereira |
| Radicación No. | 66001–31-05-005-2018-00122-01 |
| Juzgado origen: | Quinto Laboral del Circuito de Pereira |
| Tipo de proceso: | Ordinario Laboral |
| Providencia: | Sentencia de Segunda Instancia |
| Decisión: | **MODIFICA SENTENCIA** |

Registro del proyecto: primero (01) de octubre de 2020

Acta de discusión No. 144 del seis (06) de octubre de 2020

Pereira, Risaralda, nueve (9) de octubre de dos mil veinte (2020)

 De conformidad con el numeral 1º del artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, según el cual las sentencias de segunda instancia en materia laboral deben proferirse de manera escrita, procede la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Pereira, integrada por las magistradas **ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO (ponente), ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN**y**OLGA LUCÍA HOYOS SEPÚLVEDA,** a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes respecto de la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Pereira, dentro del proceso ordinario laboral de la referencia.

Previamente se revisó, discutió y aprobó el proyecto elaborado por la Magistrada ponente el cual alude a la siguiente:

**SENTENCIA**

**I.  ANTECEDENTES**

**1.1.   Demanda**

Pretende el demandante que la justicia ordinaria laboral declare que (i) tiene derecho al reajuste o incremento de la pensión de jubilación reconocida, en los términos de la Ley 4 de 1976; 71 de 1988 y 100 de 1993, así como al reajuste extraordinario previsto en la Ley 6 de 1992 y Decretos 2108 de 1992 y, 692 de 1994; (ii) que la demandada debe continuar pagando el mayor valor que resulte entre la pensión de jubilación liquidada y la pensión de vejez que el antiguo Instituto de Seguros Sociales reconoció a partir del 3 de octubre de 2002.

Consecuente con ello, solicita que se condene a la entidad accionada a reajustar la prestación pensional a partir del 1 de enero de 1987, debidamente indexada, y a asumir el pago de las diferencias existentes, junto con los intereses moratorios sobre el valor del retroactivo causado, más las costas del proceso a su favor.

Como fundamento a esas pretensiones expuso que mediante Resolución 1671 de 1986 las entonces Empresas Públicas de Pereira le reconocieron la pensión de jubilación a partir del 23 de octubre de esa anualidad, en cuantía inicial de $52.157,45, sin reajustar la prestación conforme a las normas antes referidas. Aduce que mediante Resolución 2625 de 2003 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez a partir del 3 de octubre de 2002, calenda en que cumplió 60 años de edad, en cuantía de $625.713, ordenando girar a favor de la entidad demandada el retroactivo pensional; que a partir de esa calenda el I.S.S ha venido descontando al actor el 12% de su mesada, sin que la misma hubiere sido reajustada. Refiere que mediante Resolución 298 del 7 de octubre de 2003 la Empresa de Energía de Pereira S.A., quien sustituyó a las Empresas Públicas de Pereira, ordenó compartir la pensión de jubilación con la de vejez reconocida por el ISS, quedando a cargo del pago del mayor valor en la suma de $111.112 a partir de septiembre de 2003; que se presentó solicitud para el pago de los reajustes e incrementos peticionados, y que mediante escrito del mes de noviembre de 2017, el Subgerente de Desarrollo Humano y Organizacional de la empresa demandada se pronunció negando los mismos.

**1.2.     Respuesta a la demanda.**

Dentro del término de ley, la **Empresa de Energía de Pereira S.A**. a través de su portavoz judicial, respondió la demanda, calificando como ciertos los hechos relativos al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, su disfrute y cuantía, el aumento de la cotización para salud, el reconocimiento de la pensión de vejez, la devolución que se le hizo del retroactivo causado, la disposición de compartir la pensión reconocida, la reclamación presentada y su respuesta desfavorable. En relación con los hechos restantes, manifestó que no eran ciertos o no le constaban. Se opuso a las pretensiones de la Litis y en su defensa propuso como medios exceptivos de fondo los que denominó “Falta de causa, inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido”, “Pago”, “Prescripción” e “Inexequibilidad de las disposiciones invocadas”, ver folios 74 a 86.

**II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El juzgado de conocimiento puso fin a la primera instancia mediante sentencia dictada el 15 de agosto de 2019, en la que declaró que el señor Orlando Antonio Hincapié Caviedes tiene derecho a los reajustes ordinarios de la pensión de jubilación reconocida por las Empresas Públicas de Pereira a partir del 1 de enero de 1987 en adelante, en los términos de los postulados de las Leyes 4 de 1976, 71 de 1988 y 100 de 1993, así como al reajuste extraordinario contemplado en el Decreto 692 de 1994.

En consecuencia, condenó a la Empresa de Energía de Pereira a reajustar la pensión de jubilación reconocida al demandante, a partir del 1 de enero de 1987 y hasta el 2 de octubre 2002, y a partir del día siguiente y hasta el 7 de junio de 2019, a cancelar el mayor valor resultante entre dicha prestación y la de vejez reconocida por Colpensiones. Declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las diferencias causadas con anterioridad al 17 de julio de 2014, y corolario de lo anterior, condenó a la demandada a reconocer y pagar a favor de la masa sucesoral del actor las diferencias causadas a razón de $20`942.866, sin perjuicio de los descuentos por salud, sobre las mismas, ordenando que con posterioridad se tenga en cuenta como mayor valor de mesada pensional para el año 2019 la suma de $567.324.

Condenó igualmente al pago de la indexación de las diferencias pensionales reconocidas, y a las costas procesales a cargo de la parte vencida en un 40% de las causadas. Absolvió de las demás pretensiones.

Para arribar a esas determinaciones, la *a quo* argumentó, en síntesis, que la Ley 4 de 1976, estableció en su artículo 1° la forma en que debían reajustarse las pensiones anualmente, al igual que la ley 71 de 1988, que dispuso un reajuste en la misma proporción que el incremento para el smlmv, sin que de las probanzas arrimadas al plenario pueda concluirse que la entidad demandada procedió de conformidad. Encontró viable además el reajuste contemplado en el Decreto 692 de 1994, con el argumento de que el artículo 143 de la ley 100 de 1993 exige la obligación de reajustar las prestaciones cada año igual a la elevación de la cotización del sistema de salud del pensionado antes de 1994.

En relación con el reajuste contemplado en la Ley 6 de 1992, consideró que no era procedente en razón a que fue dispuesto para compensar las diferencias de pensiones de jubilación del sector público de orden nacional antes del 1989, y la entidad demandada para aquella época era un establecimiento público de orden municipal, lo que conlleva a la inaplicación de la norma en mención, para lo cual citó apartes de jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

**III. RECURSOS DE APELACIÓN**

Inconformes con la decisión, ambos sujetos procesales apelaron la sentencia:

La parte activa en lo que le fue desfavorable en la sentencia, concretamente, lo atinente al reajuste pensional solicitado con fundamento en la Ley 6 de 1992, reglamentada en el Decreto 2108 de ese mismo año, para lo cual argumentó que la omisión de la empleadora se extendió por vía jurisprudencial también hacia trabajadores o servidores públicos de todos los órdenes, con base en el artículo 13 de la CN, que debió aplicarse, citando para el efecto una sentencia de la jurisdicción contencioso administrativo del 17 de agosto de 2006, radicación 2002-5071. Se mostró inconforme también con la negación al pago de intereses moratorios por las diferencias derivadas de los reajustes, arguyendo que existió mala fe y que no se puede premiarse al empleador de la conducta irregular de no pagar lo debido.

La entidad demandada por su parte, manifestó que las antiguas Empresas Públicas de Pereira y la actual demandada han venido reajustando la pensión del demandante con base en las normas legales, y por ende, no hay lugar a reconocer diferencia alguna, ni a reconocer los descuentos en salud se hubieren efectuado, pues no existe prueba de ello, motivo por el cual solicita se revoque la sentencia y se le absuelva de todas las condenas impuestas.

**IV. ALEGATOS DE INSTANCIA**

Dentro del término otorgado a las partes para descorrer el traslado, ambas allegaron escrito de alegaciones al correo electrónico del Despacho, por lo que se procede a resolver de fondo previo a las siguientes:

**V. CONSIDERACIONES**

**5.1. Presupuestos Procesales.**

Sirve la revisión del expediente para determinar que los requisitos esenciales para su formación y desarrollo normal se encuentran reunidos a cabalidad, circunstancia que permite ser decidido con sentencia de mérito. Por otra parte, tampoco se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado.

**5.2. Problemas jurídicos por resolver.**

De conformidad con los puntos de apelación de la sentencia de primera instancia, se encuentra que los problemas jurídicos a resolver se circunscriben a determinar ***(i)*** si la mesada pensional del actor ha sido actualizada o reajustada conforme a las disposiciones legales vigentes, tal cual lo alega la entidad demandada; en caso negativo dilucidar ***(ii)*** si es procedente el reajuste de la mesada pensional en los términos solicitados por el demandante, con base en la Ley 6 de 1992, y si hay lugar a imponer condena al pago de los intereses moratorios deprecados.

**5.3. Desenvolvimiento de la problemática planteada**

En materia laboral, el régimen de los efectos de la ley se estatuyó en el artículo 16 del Código Sustantivo, prescribiendo que las normas que regulan las relaciones laborales, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, y por tanto, incluso se aplican a las relaciones vigentes o en curso al momento en que empiezan a regir, pero no tienen efecto retroactivo sobre situaciones definidas o consumadas bajo leyes anteriores.

Acorde con este precepto, es el legislador el encargado de adoptar marcos normativos para ámbitos concretos, como en el caso del reajuste pensional y de señalar sus efectos temporales.

**5.3.1 Caso concreto**

No se discute en este asunto por existir plena prueba de ello que *(i)* mediante Resolución No. 1671 de 1986, las Empresas Públicas de Pereira S.A. ESP le concedieron al demandante la pensión de jubilación a partir del 23 de octubre de 1986, en cuantía de $52.157 (fl.35); *(ii)* que dicha prestación fue asumida por la Empresa de Energía de Pereira S.A. ESP, a partir del 1° de enero de 2008; *(iii)* que por medio de la Resolución No. 2625 de 2003 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció al demandante la pensión de vejez a partir del 23 de agosto de 2002, en cuantía 625.713 (fl.39); que mediante Resolución No. 298 de 2003, la pensión de jubilación quedó compartida con la de vejez reconocida por el ISS, a partir de septiembre de 2003, quedando a cargo del empleador la suma de $ 111.112 (fl.37).

De conformidad con los cuestionamientos planteados, la Sala abordará los problemas jurídicos realizando un itinerario normativo en materia de reajustes pensionales, desde el momento en que le fue reconocida la pensión de jubilación al demandante y hasta la entrada en vigencia el nuevo estatuto de seguridad social de la Ley 100 de 1993, con el fin de establecer si la entidad demandada actuó conforme las disposiciones legales vigentes.

**5.3.2 Del reajuste pensional conforme a lo previsto en la Ley 4° de 1976**

Establece el artículo 1° de la Ley 4º de 1976, por la cual se dictan normas sobre materia pensional de los sectores público, oficial, semioficial y privado y se dictan otras disposiciones, que:

“*ARTICULO 1°. Las pensiones de jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes, de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, y en el sector privado, así como las que paga el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales a excepción de las pensiones por incapacidad permanente parcial, se reajustarán de oficio, cada año, en la siguiente forma:*

*Cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto, se procederá como sigue: con una suma fija igual a la mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, más una suma equivalente a la mitad del porcentaje que represente el incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo mensual legal más alto, esto último aplicado a la correspondiente pensión.*

*Cuando transcurrido el año sin que sea elevado el salario mínimo mensual legal más alto se procederá así: Se hallará el valor de incremento en el nivel general de salarios registrado durante los últimos doce meses. Dicho incremento se hallará por la diferencia obtenida separadamente entre los promedios de los salarios asegurados de la población afiliada al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Establecido el incremento, se procederá a reajustar todas las pensiones conforme a lo previsto en el inciso 2º de este artículo.*

*PARÁGRAFO 1º. Con base en los promedios de salarios asegurados, establecidos por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, se reajustarán las pensiones del sector privado y las del mismo Instituto. Y las del sector público se reajustarán con los promedios establecidos por la Caja Nacional de Previsión Social.*

*PARÁGRAFO 2º. Los reajustes a que se refiere este artículo se harán efectivos a quienes hayan tenido el status de pensionado con un año de anticipación a cada reajuste.*

*PARÁGRAFO 3º. En ningún caso el reajuste de que trata este artículo será inferior al 15% de la respectiva mesada pensional, para las pensiones equivalentes hasta un valor de cinco veces el salario mensual mínimo legal más alto.”*

Acorde con lo anterior, es claro que el momento a partir del cual debe realizarse el primer reajuste de la mesada pensional es *“cuando se eleve el salario mínimo mensual legal más alto vigente”* o en el evento de que este no se hubiere elevado cuando haya transcurrido ese año. Así mismo, que con base en el parágrafo 3° de la norma en comento, indistintamente de las diferentes variables y esquemas allí previstos para el reajuste de las pensiones, lo cierto es que, si al aplicar las reglas de todos los incisos resulta un incremento inferior al 15%, este deberá equipararse a dicha cifra, tal cual lo ha resaltado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en sentencia SL 3933 de 2018.

Así las cosas, teniendo en cuenta que el señor Orlando Antonio Hincapié Caviedes consolidó el status de pensionado a partir de octubre de 1986, el primer reajuste de su mesada pensional debió ocurrir al momento en que se presentó un incremento en el salario mínimo mensual más alto vigente, esto es, el 1° de enero de 1987, debiéndose entonces tomar para efectos del cálculo del respectivo reajuste, el valor del salario mínimo legal correspondiente a esa anualidad y, el del año inmediatamente anterior, esto es, 1987-1986, para efectos del comparativo.

Como quiera que la entidad empleadora efectuó los cálculos para el reajuste de la mesada pensional del año 1987, tomando en consideración el valor de los salarios mínimos legales mensuales vigentes para los años 1985 y 1986, había lugar a realizar el reajuste en forma correcta, en los términos de la referida norma, pues se itera, si la mesada a reajustar es la correspondiente al año 1987, cuya anualidad experimentó una alza anual con la expedición del Decreto 3732 de 1986, lógico era tomar en cuenta este nuevo salario para hacer la respectiva operación en relación con el antiguo salario, tal cual lo establece la norma en comento.

En ese orden de ideas, en aras de verificar el valor del reajuste de la mesada pensional del demandante, se procederá a la aplicación a la siguiente fórmula:

PR: X + (R \* PA)

Donde:

PR = valor de la pensión reajustada.

PA = valor de la pensión que venía recibiendo.

X = mitad de la diferencia entre el antiguo y el nuevo salario mínimo legal más alto.

R = mitad del % del incremento entre el antiguo y el nuevo salario mínimo más alto.

Lo que se deriva de dicha formula es que las pensiones perdían su capacidad adquisitiva al no moverse al ritmo de los incrementos en el costo de vida, ni de los salarios, porque en términos porcentuales los reajustes eran inferiores al aumento del índice de precios al consumidor y de los porcentajes generales de aumentos de las remuneraciones de los trabajadores.

Así las cosas, efectuados los cálculos pertinentes se tiene que los incrementos de las mesadas pensionales del demandante, en aplicación de lo previsto por el artículo 1° de la Ley 4° de 1976, correspondían a:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **SALARIO MINIMO** | **MITAD DE LA DIFERENCIA ENTRE EL ANTIGUO Y EL NUEVO SMLMV** | **% VARIACIÓN ANUAL SMLMV** | **MITAD DEL % QUE REPRESENTA EL INCREMENTO ENTRE EL ANTIGUO Y EL NUEVO SMLMV** | **MESADA QUE PERCIBIÓ** | **INCREMENTO EFECTIVO DE LA MESADA** | **MESADA QUE DEBIÓ PERCIBIR** |
| 1986 | $ 16.811,00 |  |  |  | $ 52.157,45 |  | $ 52.157,45 |
| 1987 | $ 20.510,00 | $ 1.849,50 | 22% | 11% | $ 60.043,00 | $ 7.827 | $ 59.981,45 |
| 1988 | $ 25.637,00 | $ 2.563,50 | 25% | 12,5% | - | $ 10.031,53 | $ 70.012,98 |

En este punto, es preciso advertir que aunque el incremento porcentual efectuado para el reajuste del año 1987, resulta inferior al 15% que establece el parágrafo 3 de la Ley 4° de 1976, y que por ende, este debía equipararse a esa cifra porcentual en consideración a que la mesada pensional del demandante no excedía los 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época, lo cierto es que la *a-quo* omitió dicho razonamiento, y la parte actora no manifestó inconformidad alguna al respecto, motivo por el cual se mantendrán incólumes los valores irrogados en la sentencia de primer grado respecto de los reajustes correspondientes a los años 1987 y 1988, en cuantía de $60.043 y $68.496,96, respectivamente.

**5.3.3 Del reajuste pensional conforme a lo previsto por la Ley 71 de 1988**

Dispone el artículo 1° de la Ley 71 de 1988 que: “*las pensiones a que se refiere el artículo 1º de la Ley 4º de 1976, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno Nacional el salario mínimo legal mensual. Parágrafo. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo”.*

La lectura de tal disposición lleva a predicar que el legislador optó por tomar otro patrón de las revalorizaciones pensionales, prohijando como referente el incremento del salario mínimo legal mensual, prescribiendo que el reajuste se haría en el mismo porcentaje, pero como es elemental, a partir de la vigencia de dicha ley, con lo cual se enmendaba la inequidad, dado que a partir de entonces el reajuste pensional quedaba en un monto similar al costo de vida, toda vez que es un hecho notorio que los incrementos en la remuneración mínima se decretaron en un porcentaje similar al de aumento del IPC.

Así las cosas, conforme se presenta en el siguiente cuadro elaborado por la Sala el valor del incremento o reajuste de la mesada pensional del demandante en aplicación de la referida norma debió ser:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AeÑO** | **SALARIO MINIMO** | **% VARIACIÓN ANUAL SMLMV** | **MESADA QUE DEBIÓ PERCIBIR** | **MESADA QUE PERCIBIÓ** | **DIFERENCIA PENSIONAL** |
| 1989 | 32560 | 27% | $ 86.991,14 | - |  |
| 1990 | 41025 | 26% | $ 109.608,84 | - |  |
| 1991 | 51716 | 26,06% | $ 138.172,90 | $ 120.993,50 | $ 17.179,40 |
| 1992 | 65190 | 26,05% | $ 174.166,94 | $ 152.512,00 | $ 21.654,94 |
| 1993 | 81510 | 25% | $ 217.708,67 | $ 190.640,00 | $ 27.068,67 |

A partir de lo señalado, se colige que la entidad empleadora no efectuó en forma correcta el reajuste de la mesada pensional del demandante, pues aunque no milita prueba del valor de la mesada que aquel recibió durante los años 1989 y 1990, lo cierto es que del valor pagado durante las anualidades siguientes es posible deducir que el reajuste otorgado fue inferior al que legalmente le correspondía, motivo por el cual era procedente acceder al reajuste pensional solicitado con fundamento en el artículo 1° de la Ley 71 de 1988.

No obstante, como quiera que la *a-quo* obtuvo a título de valor de la mesada pensional reajustada durante los años 1991, 1992 y 1993, la suma de $138.183,38, $174.171,98 y, $217.775,08, respectivamente, montos levemente superiores a los obtenidos en esta instancia, se ordenará la MODIFICACIÓN de la sentencia con base en los valores consignados en el cuadro anterior, en torno al valor de la mesada y la diferencia pensional de dichas anualidades, en consideración al recurso de apelación interpuesto por la demandada, encaminado a cuestionar los reajustes ordenados en la sentencia de primer grado, lo que incluye implícitamente también su valor.

**5.3.4 Del reajuste extraordinario previsto en la Ley 6 de 1992 y el Decreto 2108 de 1992**

Solicita la parte actora, se acceda al reajuste pensional contemplado en la referida norma, al estimar que el mismo es aplicable por virtud del derecho a la igualdad, a favor de todos los pensionados del Estado, sin discriminar a los del orden territorial o distrital, tal como lo ha establecido de tiempo atrás la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Para resolver, es preciso indicar que el artículo 116 de la Ley 6ª de 1992 dispuso el reajuste de las pensiones de jubilación reconocidas con anterioridad al año 1989, con el siguiente tenor:

*“ARTICULO 116. Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el reajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1o de enero de 1989.*

*Los reajustes ordenados en este artículo comenzarán a regir a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente y no producirán efecto retroactivo.”*

Como se observa, tal disposición ordenó una nivelación pensional en **el sector público nacional** a fin de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones causadas con antelación al año 1989 y que fueron afectadas por la inflación y por existir diferencias con los aumentos de salario decretados anualmente para esta clase de servidores o para dicho sector.

Tal reglamentación fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-531 de 20 de noviembre 1995, MP. Alejandro Martínez Caballero, por ser violatoria de la unidad de materia, pues el tema de la ley era tributario y el artículo reguló un asunto prestacional. La Corte precisó que los efectos del fallo no podrían afectar las situaciones jurídicas consolidadas en vigencia de la norma e invocó como fundamento el artículo 58 de la Carta Política que consagra el principio de los derechos adquiridos.

En relación con este aspecto la Corte expuso:

*“...La Corte ha señalado que es a ella a quien corresponde fijar los efectos de sus sentencias, a fin de garantizar la integridad y supremacía de la Constitución. En este caso, esta Corporación considera que, en virtud de los principios de la buena fe (CP art. 83) y protección de los derechos adquiridos (CP art. 58), la declaración de inexequibilidad de la parte resolutiva de esta sentencia sólo tendrá efectos hacia el futuro y se hará efectiva a partir de la notificación del presente fallo. Esto significa, en particular, que la presente declaratoria de inexequibilidad no implica que las entidades de previsión social o los organismos encargados del pago de las pensiones puedan dejar de aplicar aquellos incrementos pensionales que fueron ordenados por la norma declarada inexequible y por el Decreto 2108 de 1992, pero que no habían sido realizados al momento de notificarse esta sentencia, por la ineficiencia de esas mismas entidades, o de las instancias judiciales en caso de controversia. En efecto, de un lado el derecho de estos pensionados al reajuste es ya una situación jurídica consolidada, que goza entonces de protección constitucional (C.P. art. 58). Mal podría entonces invocarse una decisión de esta Corte, que busca garantizar la integridad de la Constitución, para desconocer un derecho que goza de protección constitucional.*”

Por su parte, el Decreto 2108 de 1992 reglamentario de la Ley 6ª de 1992, ordenó el ajuste extraordinario de las pensiones de jubilación del sector público del orden nacional, compatible con los incrementos decretados por la Ley 71 de 1988, reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1989, con la finalidad de compensar las diferencias entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento de las mesadas pensionales, así:

*“Artículo 1º. Las pensiones de jubilación del Sector Público del Orden Nacional reconocidas con anterioridad al 1 de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 1 de enero de 1993, 1994 y 1995 así:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *1993* | *1994* | *1995* |
| *1981 y anteriores 28% distribuidos así:* | *12.0* | *12.0* | *4.0* |
| *1982 hasta 1988 14% distribuidos así:* | *7.0* | *7.0* | *--* |

Dicho decreto fue declarado nulo en su artículo 1° por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 11 de junio de 1998, CP Nicolás Pájaro Peñaranda, Expediente No.11636, con fundamento en la declaratoria de inexequibilidad del artículo 116 de la Ley 6ª de 1992, indicándose lo siguiente:

*“2. Como se ve claramente, fue la ley reglamentada la que restringió sus alcances a las pensiones de jubilación del sector público nacional, y en tales condiciones el gobierno nacional al expedir el decreto reglamentario, no podía disponer algo diferente, tratando de ampliar su campo de aplicación a las pensiones de los órdenes municipal y departamental, porque ello habría sido violatorio de la competencia reglamentaria en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política.*

*3. Sinembargo, (sic) como la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del transcrito artículo 116, mediante sentencia C-531 de 20 de noviembre de 1995, la Sala habrá de declarar la nulidad de la norma acusada que la reglamentó, de acuerdo con su reiterada jurisprudencia, por ser ello una obvia consecuencia de tal determinación”.*

Con base en lo anterior, bien puede concluirse que el artículo 116 de la Ley 6 de 1992 rigió desde su expedición hasta el 20 de noviembre de 1995, fecha en la cual fue retirado del ordenamiento jurídico, empero que, siguió teniendo efectos para quienes adquirieron el derecho bajo su vigencia, corriendo la misma suerte el Decreto 2108 de 1992, expedido en desarrollo del referido canon que le dio origen.

Ahora bien, en relación con la aplicabilidad del referido reajuste, se precisa que si bien es cierto que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha trazado una línea jurisprudencial según la cual es posible inaplicar la expresión “del orden nacional”, contenida en el artículo 1 del Decreto 2108 de 1992, por considerar que tal discriminación viola el derecho a la igualdad; también lo es que esta Sala comparte la línea jurisprudencial adoctrinada de tiempo atrás por el órgano de cierre de esta especialidad laboral, en el sentido de que el referido ajuste únicamente cobija a los pensionados del orden nacional, sin que pueda hacerse extensivo al pensionado del orden territorial o distrital, so pena de desbordar el querer del legislador y hacerle producir a la norma efectos en ámbitos diferentes.

En sentencia SL 1399 de 2019, radicación 67051, mediante la cual la Corte reiteró lo dicho en providencia SL, 11 dic. 2003, rad. 22107, reiterada a su vez en CSJ SL15775-2014, al analizar el reajuste hoy reclamado, indicó:

*“El tema relativo a la aplicabilidad de los artículos 116 de la ley 6ª de 1992 y 2º del decreto 2108 del mismo año a los servidores del orden distrital, ya ha sido definido por esta Corporación en el sentido de descartar su extensión a los pensionados de dicho ámbito.*

*Así, basta remitirse a lo precisado en sentencia del 13 de mayo de 2003, reiterada el pasado 12 de noviembre, al analizar un caso bajo los mismos supuestos de hecho, en los siguientes términos:*

*“El Tribunal consideró que los reajustes pensionales pretendidos con sustento en el Decreto 2108 de 1992 no son procedentes en la medida en que tal normatividad “sólo es aplicable a las pensiones de los servidores del sector público nacional.”, mientras que para la acusación, esa preceptiva también se extiende a otros órdenes territoriales por razón de algunos principios constitucionales, en especial el de igualdad y el referido al obligado incremento pensional y toda vez que considera que aquel alcance dado a la norma va en contravía de las decisiones proferidas por el Consejo de Estado, que se apartan de la expresión “orden nacional” contenida en aquel Decreto.*

*“Pues bien, las razones a que alude la impugnación no son suficientes para concluir que la normatividad acusada fue erróneamente interpretada, puesto que es claro su tenor al disponer:*

*“Artículo 1º.- Las pensiones de jubilación del Sector Público del Orden Nacional reconocidas con anterioridad al 1º de enero de 1989 que presenten diferencias con los aumentos de salarios serán reajustadas a partir del 1º de enero de 1993, 1994 y 1995 así (..). (Decreto 2108 DE 1992).*

*“En igual sentido el art. 116 de la Ley 6ª de 1992 previó:*

*“Ajuste a pensiones del sector público nacional. Para compensar las diferencias de los aumentos de salarios y de las pensiones de jubilación del sector público nacional, efectuados con anterioridad al año 1989, el Gobierno Nacional dispondrá gradualmente el ajuste de dichas pensiones, siempre que se hayan reconocido con anterioridad al 1º de enero de 1989.*

*“Los reajustes ordenados en este artículo, comenzarán a partir de la fecha dispuesta en el decreto reglamentario correspondiente, y no producirán efecto retroactivo.” (Subrayas fuera del texto original).*

*“Vistas las normas censuradas, y en especial las expresiones resaltadas en las anteriores transcripciones, es menester anotar que existe total claridad respecto a las pensiones susceptibles de los reajustes allí previstos, esto es, las del orden nacional, sin que puedan, en consecuencia, hacerse extensivos tales incrementos a otros niveles territoriales puesto que de hacerse así se desbordaría el querer del legislador; y siendo claro el tenor de ley, no es dable a su intérprete darle unos alcances distintos o hacerle producir efectos en ámbitos diferentes.”*

Así las cosas, como quiera que la naturaleza jurídica de las Empresas Públicas de Pereira durante los años 1986 a 1995 fue la de un establecimiento público del orden municipal, según se certificó en el documento visible a folio 202, la Sala al igual que lo estimó la sentenciadora de primer grado, concluye que el actor no tiene derecho al reajuste debatido, por cuanto no tenía la calidad de pensionado del orden nacional, conforme lo exige la norma en comento.

Por consiguiente, no sale avante el recurso de apelación de la parte activa en este puntual aspecto, razón por la cual se CONFIRMARÁ la negativa.

**5.3.4 Del reajuste pensional conforme a lo previsto por la Ley 100 de 1993**

La Ley 100 de 1993 consagró el reajuste anual automático de las pensiones de invalidez, vejez o jubilación, y de sustitución o sobrevivientes, en los dos sistemas establecidos en el régimen general de pensiones, el cual deberá realizarse el 1° de enero de cada año. De la misma manera, estableció dos factores para efectos de determinar el valor del incremento correspondiente, a saber: el índice de precios al consumidor y el aumento del salario mínimo, cuya utilización depende del monto mensual de la pensión, así:

*1. Si el valor de la pensión es mayor que el salario mínimo mensual vigente, el reajuste se hará de acuerdo a la variación porcentual del índice de precios al consumidor que certifique el DANE, para el año inmediatamente anterior.*

*2. Si el valor de la pensión es igual al salario mínimo mensual vigente, el reajuste se hará en el mismo porcentaje en que se incremente éste.*

Así, el parágrafo del artículo 41 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, dispuso que el primer ajuste de pensiones, de conformidad con la nueva fórmula establecida, se hiciera a partir del 1° de enero de 1995.

De otro lado, el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 aumentó el porcentaje de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud al 12%, y por virtud del artículo 1o de la Ley 1250 de 2008, se mantuvo en dicho porcentaje sobre el ingreso de la respectiva mesada pensional.

En tales condiciones, con sustento en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, el legislador dispuso el reajuste de las pensiones causadas con anterioridad al 1 de enero de 1994, en un porcentaje igual a la elevación de la cotización para el sistema de salud a cargo del pensionado.

Al respecto, el artículo 143 de la Ley 100 de 1993 prevé:

*Artículo 143.- A quienes con anterioridad al 1° de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez o muerte, tendrán derecho, a partir de dicha fecha, a un reajuste mensual equivalente a la elevación en la cotización para salud que resulte de la aplicación de la presente ley.*

En similar sentido, el artículo 42 del Decreto Reglamentario 692 de 1994, preceptúa:

*“Artículo 42.- Reajuste pensional por incremento de aportes en salud. A quienes con anterioridad al 1° de enero de 1994 se les hubiere reconocido la pensión de vejez o jubilación, invalidez, o sobrevivientes, y a quienes sin haberles efectuado el reconocimiento tuvieren causada la correspondiente pensión con los requisitos formales completos, tendrán derecho a partir de dicha fecha a que con la mesada mensual se incluya un reajuste equivalente a la elevación en la cotización para salud prevista en la Ley 100 de 1993.*

*En consecuencia, las entidades pagadoras de pensiones procederán a efectuar el reajuste previsto en este artículo por la diferencia entre la cotización que venían efectuando los pensionados y la nueve ‘cotización del 8% que rige a partir de abril de 1993, o la que se determine cuando rija la cobertura familiar, sin exceder del 12%. En el caso del ISS, en donde ya existe la modalidad de medicina familiar para los pensionados, el reajuste se hará por la diferencia entre el 3.96% que venían aportando los pensionados, y el 12% de la cotización con cobertura familiar.”*

De conformidad con las normas transcritas, las personas pensionadas con anterioridad al 1 de enero de 1994 o aquellas que hubieran causado la pensión con el lleno de los requisitos formales, tienen derecho a que a partir de dicha fecha la entidad pagadora de la pensión les reconozca un reajuste de su mesada equivalente a la nueva elevación en la cotización a salud, con el fin de que el monto de la mesada no sufra ningún deterioro económico.

La sentenciadora de primer grado encontró viable el pago de dicho reajuste argumentando que, según las probanzas recopiladas en el plenario, la entidad demandada no cumplió con la carga de acreditar que aplicó los reajustes. En su alzada, la accionada cuestionó tal decisión, aduciendo que no existe prueba de que tales descuentos se hubieren efectuado.

Pues bien, para resolver es preciso recordar *(i*) el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 establece que los afiliados al sistema mediante el régimen contributivo son entre otras personas, los pensionados o jubilados; *(ii)* el Decreto 806 de 1998 por el cual se reglamenta la afiliación al sistema de seguridad social en salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial, señala en el artículo 26, que las personas con capacidad de pago deberán afiliarse al régimen contributivo mediante el pago de una cotización o aporte económico previo obligatorio, el cual será financiado directamente por el afiliado; *(iii)* por ende, los pensionados están obligados a cotizar a salud para garantizar la prestación de los servicios de salud que requieren, tanto para sí como para su grupo familiar, los cuales son descontadas de la mesada pensional de cada pensionado, de modo que, este las asume de manera directa el pago del aporte; *(iv)* los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud son rentas parafiscales, pues son contribuciones que tienen como sujeto pasivo un sector específico de la población y se destinan para su beneficio; y *(vi)* la referida contribución parafiscal en salud para los pensionados antes Ley 100 de 1993,fue prevista desde el artículo 2o de la Ley 4o de 1966, el artículo 90 del Decreto 1848 de 1969, y el artículo 16 de la Ley 4a de 1976.

Bajo ese entendido, es claro que, conforme a las normas legales citadas en precedencia, tales descuentos destinados para el Sistema de Salud, **son descuentos obligatorios**, de modo que, la entidad pagadora de la pensión, en este caso, el empleador, estaba obligado a efectuar la deducción correspondiente del valor de la mesada pensional del demandante, por lo que no es de recibo el argumento de la entidad recurrente en el sentido de que no se acreditó que tales descuentos se hubieren efectuado al demandante, pues como se vio, se trata de una obligación de orden legal de obligatorio cumplimiento.

En ese orden, al analizar las circunstancias particulares del caso se tiene que: *(i)* el demandante consolidó su derecho pensional con antelación al 1° de abril de 1994, *(ii)* continuó gozando de los servicios médicos y asistenciales de los que gozan los trabajadores activos de las Empresas Públicas de Pereira, tal como se dejó consignado en el acto administrativo que le reconoció el derecho a la pensión de jubilación (fl.35); *(iii)* de los actos administrativos Nos. 262 de 1995, 024 de 1996, 020 de 1997, 326 de 1998 y 007 de 1999, expedidos por la Gerencia de las antiguas Empresas Públicas de Pereira (fls.96 a 107), se observa que únicamente se dispuso el reajuste anual automático de las pensiones de jubilación a su cargo, s**egún la variación del IPC,** conforme a lo dispuesto en Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 692 del mismo año, sin que se haya contemplado el reajuste por el aumento de la cotización en salud; y *(iv)* de los desprendibles de nómina la pensión compartida a cargo de ISS hoy Colpensiones se colige que los referidos descuentos se han hecho efectivos durante los años 2003 a 2019 (fls.56, 57, 195 a 199).

Aunado a lo anterior, se tiene que en hecho 12 de la demanda, el actor negó indefinidamente que las Empresas Públicas de Pereira hubieren efectuado el reajuste de la pensión, o en su defecto, asumido el pago correspondiente por la elevación del descuento en salud, de modo que, le correspondía a la demandada acreditar lo contrario, sin embargo, ningún elemento de prueba enlistó en tal sentido.

A la luz de lo expuesto, se concluye que el demandante tiene derecho al pago del reajuste de su mesada pensional por una sola vez a partir del 1° de abril de 1994, en el equivalente a la elevación de la cotización para salud prevista en los artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 del Decreto 692 de 1994, esto es, en un 8.04% que resulta de la diferencia habida entre el 12% y el 3.96% que debían asumir los pensionados, tal cual lo razonó la *a-quo.*

Así las cosas, teniendo en cuenta que el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada prosperó en forma parcial, pues el reajuste derivado de la aplicación de la Ley 71 de 1988, calculado en esta instancia, resultó inferior al calculado por la *a-quo*, procede la Sala a reajustar el valor del incremento pensional con fundamento en los artículos 14, 42 y 143 de la Ley 100 de 1993, a fin de establecer las diferencias pensionales en favor del demandante, y el mayor valor que debe asumir el empleador por virtud de la pensión compartida, pues la variación de dicho quantum implica necesariamente la modificación de los demás reajustes, tal como se ilustra en la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Año** | **IPC año anterior** | **Incre-mento adicional de la cotiza-ción** | **Mesada que debió recibir** | **Mesada que recibió** | **Valor pensión a cargo del ISS** | **Mayor valor pagado por la EEP** | **Reajuste del mayor valor a cargo del empleador** | **Numero de mesadas** | **Retroactivo de las diferencias reajustes** |
| 1986 |  |  | $ 52.157 | $ 52.157 |  |  |  |  |  |
| 1987 |  |  | $ 60.043 | $ 60.043 |  |  |  |  |  |
| 1988 |  |  | $ 68.497 | $ 68.497 |  |  |  |  |  |
| 1989 |  |  | $ 86.991 |  |  |  |  |  |  |
| 1990 |  |  | $ 109.609 |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  | $ 138.173 | $120.994 |  |  |  |  |  |
| 1992 |  |  | $ 174.167 | $152.512 |  |  |  |  |  |
| 1993 |  |  | $ 217.709 | $190.640 |  |  |  |  |  |
| 1994 | 22,60 | 8,04 | $ 284.415 | $230.845 |  |  |  |  |  |
| 1995 | 22,60 |  | $ 348.692 | $282.993 |  |  |  |  |  |
| 1996 | 19,46 |  | $ 416.548 | $341.558 |  |  |  |  |  |
| 1997 | 21,63 |  | $ 506.647 | $415.437 |  |  |  |  |  |
| 1998 | 17,68 |  | $ 596.222 | $488.887 |  |  |  |  |  |
| 1999 | 16,7 |  | $ 695.791 | $570.531 |  |  |  |  |  |
| 2000 | 9,23 |  | $ 760.013 | $623.191 |  |  |  |  |  |
| 2001 | 8,75 |  | $ 826.514 | $677.720 |  |  |  |  |  |
| 2002 | 7,65 |  | $ 889.743 | $729.565 | **$**625.713 | **$**103.852,00 |  |  |  |
| 2003 | 6,99 |  | $ 951.936 | $780.562 | $669.450 | $111.112,00 | $171.374 |  |  |
| 2004 | 6,49 |  | $1.013.716 | $831.220 | $712.897 | $118.323,00 | $182.496 |  |  |
| 2005 | 5,50 |  | $1.069.471 | $876.938 | $752.107 | $124.831,00 | $192.533 |  |  |
| 2006 | 4,85 |  | $1.121.340 | $919.469 | $788.584 | $130.885,00 | $201.871 |  |  |
| 2007 | 4,48 |  | $1.171.576 | $960.661 | $823.912 | $136.749,00 | $210.915 |  |  |
| 2008 | 5,69 |  | $1.238.239 | $ 1.015.323 | $870.793 | $144.530,00 | $222.916 |  |  |
| 2009 | 7,67 |  | $1.333.211 | $ 1.093.198 | $937.583 | $155.615,00 | $240.013 |  |  |
| 2010 | 2,00 |  | $1.359.876 | $ 1.115.062 | $956.334 | $158.728,00 | $244.813 |  |  |
| 2011 | 3,17 |  | $1.402.984 | $ 1.150.410 | $986.650 | $163.759,00 | $252.574 |  |  |
| 2012 | 3,73 |  | $1.455.315 | $ 1.193.320 | $1.023.452 | $169.868,00 | $261.995 |  |  |
| 2013 | 2,44 |  | $1.490.825 | $ 1.222.437 | $1.048.425 | $174.012,00 | $268.388 |  |  |
| 2014 | 1,94 |  | $1.519.747 | $ 1.246.152 | $1.068.764 | $177.388,00 | $273.594 | 6,47 | $1.770.156 |
| 2015 | 3,66 |  | $1.575.369 | $ 1.291.761 | $1.107.881 | $183.881,00 | $283.608 | 14 | $3.970.513 |
| 2016 | 6,77 |  | $1.682.022 | $ 1.379.214 | $1.182.884 | $196.329,00 | $302.808 | 14 | $4.239.316 |
| 2017 | 5,75 |  | $1.778.738 | $ 1.458.518 | $1.250.900 | $207.618,00 | $320.220 | 14 | $4.483.077 |
| 2018 | 4,09 |  | $1.851.489 | $ 1.518.172 | $1.302.062 | $216.110,00 | $333.317 | 14 | $4.666.435 |
| 2019 | 3,18 |  | $1.910.366 | $  1.566.450 | $1.343.468 | $222.982,00 | $343.916 | 5,20 | $1.788.365 |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL** | **$20.917.862** |

Acorde con lo anterior, el valor de la mesada pensional reajustada para el año 2019, asciende a la suma de $1´910.366, al paso que, el total de las diferencias causadas a partir del 17 de julio de 2014, a salvo del fenómeno extintivo de la prescripción y, hasta el 7 de junio de 2019, según los hitos tomados conforme a liquidación efectuada por la a-quo, asciende a $20´917.862, motivo por el cual se MODIFICARÁN los numerales 2°, 3° y 4° de la sentencia de primer grado.

En cuanto al ataque de la parte actora, encaminado a que se acceda al pago de los **intereses moratorios** previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, es del caso precisar que, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que, estos réditos no son viables en pensiones de jubilación convencional ya que esta prestación no está regulada integralmente por la Ley 100 de 1993. Así lo estableció entre otras, en sentencias **SL 2802, SL1758 del 22 de julio y 3 de junio de 2020,** en su orden, y además en sentencia con radicación 39100 del 13 de febrero de 2013, en la que precisó:

*“En instancia, basta reiterar lo dicho en sede de casación, sobre la improcedencia de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 frente a pensiones a cargo del empleador, como la del sublite, para decir que no tiene razón la parte actora al insistir sobre su condena en el recurso de apelación. En consecuencia, se absolverá por este concepto.”*

Acorde con lo anterior, bien hizo la sentenciadora de primer grado al acceder a la indexación de las diferencias resultantes de los reajustes pensionales, como medida para compensar el efecto inflacionario y la pérdida del poder adquisitivo que sufre la moneda con el tiempo, motivo por el cual también se CONFIRMARÁ este punto de la decisión apelada.

No prospera, por tanto, el recurso de apelación interpuesto por la activa en este sentido.

Costas en esta instancia a cargo de la parte demandante y en favor de la demandada, en un 10% de las causadas.

1. **DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira - Risaralda, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: MODIFICAR** el ordinal 2º de la sentencia proferida el 15 de agosto de 2019 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia de la referencia, el cual quedará así:

**“SEGUNDO: CONDENAR** a la **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.** a reajustar la pensión de jubilación reconocida a favor del señor **ORLANDO ANTONIO HINCAPIE CAVIEDES,** a partir del 1° de enero de 1987 y hasta el 2 de octubre de 2002, en los siguientes términos:

|  |  |
| --- | --- |
| **AÑO** | **MESADA REAJUSTADA** |
| 1986 | $ 52.157 |
| 1987 | $ 60.043 |
| 1988 | $ 68.497 |
| 1989 | $ 86.991 |
| 1990 | $ 109.609 |
| 1991 | $ 138.173 |
| 1992 | $ 174.167 |
| 1993 | $ 217.709 |
| 1994 | $ 284.415 |
| 1995 | $ 348.692 |
| 1996 | $ 416.548 |
| 1997 | $ 506.647 |
| 1998 | $ 596.222 |
| 1999 | $ 695.791 |
| 2000 | $ 760.013 |
| 2001 | $ 826.514 |
| 2002 | $ 889.743" |

**SEGUNDO. MODIFICAR** el ordinal 3° de la sentencia el cual quedará así:

**“TERCERO: DECLARAR** que el mayor valor a cargo de la **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.,** derivado de la diferencia entre la pensión de jubilación y la pensión de vejez reconocida por Colpensiones a favor del señor **ORLANDO ANTONIO HINCAPIE CAVIEDES,** alcanza los siguientes valores:

|  |  |
| --- | --- |
| **Año** | **Total del mayor valor reajustado** |
| 2002 | $103.852 |
| 2003 | $282.486 |
| 2004 | $300.819 |
| 2005 | $317.364 |
| 2006 | $332.756 |
| 2007 | $347.664 |
| 2008 | $367.446 |
| 2009 | $395.628 |
| 2010 | $403.541 |
| 2011 | $416.333 |
| 2012 | $431.863 |
| 2013 | $442.400 |
| 2014 | $450.982 |
| 2015 | $467.489 |
| 2016 | $499.137 |
| 2017 | $527.838 |
| 2018 | $549.427 |
| 2019 | $566.898” |

**TERCERO: MODIFICAR** el ordinal 4° de la sentencia referida, el cual quedará así:

**“CUARTO: DECLARAR** parcialmente próspera la excepciónde prescripción formulada por la demandada, respecto de las diferencias causadas con anterioridad al 17 de julio de 2014. En consecuencia, **CONDENAR** a la **EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P.** a reconocer pagar a favor de la masa sucesoral de señor **ORLANDO ANTONIO HINCAPIE CAVIEDES,** las diferencias causadas con el reajuste realizado a la pensión de jubilación compartida, a partir del 17 de julio de 2014 y hasta el 7 de junio de 2019, en la suma de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS** **$20´917.862,** sin perjuicio de los descuentos por salud sobre las diferencias causadas, ordenado que se cancelen las diferencias causadas teniendo en cuenta para el año 2019, un mayor valor a cargo del empleador en la suma de $566.898, conforme se indicó en el cuadro anterior.”

**CUARTO:**  **CONFIRMAR** en todo lo demás.

**QUINTO:** Costas en esta instancia a cargo de la parte activa y en favor de la demandada en un 10% de las causadas.

Notifíquese y cúmplase,

**ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO**

Magistrada Ponente

**ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN OLGA LUCIA HOYOS SEPÚLVEDA**

Magistrada Magistrada

Salvo voto parcial